Universidad y financiación pública

José García Montalvo

Catedrático de Economía

Universitat Pompeu Fabra

Los datos estimados, todavía no reales, de los estudiantes en universidades públicas del curso 2013-14 muestran una caída del 0,6% desde el curso 2011-12. La coincidencia temporal con el importante aumento de los precios públicos en el curso 2012-13 ha producido multitud de interpretaciones que ligan los dos fenómenos. No obstante esta lectura de los datos tiene pocos visos de ser relevante. En primer lugar si esta hipótesis fuera correcta se debería observar una correlación significativa entre la caída de estudiantes y el aumento de los precios públicos entre CCAA. Pero este efecto no se observa. Además los estudiantes universitarios siguen siendo un 4,2% más que cuando comenzó la crisis. En segundo lugar si la relación entre las dos variables fuera tan simple sería imposible explicar cómo entre el curso 1999-00 y el comienzo de la crisis se produjo una caída del 15% de los estudiantes sin una subida de precios significativa en términos reales. Claramente hay otros factores que explican la evolución del alumnado como el coste de oportunidad de realizar estudios universitarios y la demografía. Respecto a este último se observa que la población del grupo de edad relevante (entre 18 y 24 años) se está contrayendo desde 2009 entre el 2% y el 3% anual. Desde que comenzó la crisis se ha reducido claramente el coste de oportunidad de realizar estudios universitarios (hay menos oportunidades de trabajar si no se realizaran estudios) pero esta tendencia, muy potente en los primeros años, es difícil que pueda dominar en el medio plazo una caída anual tan rápida del grupo de edad relevante para los estudios universitarios. De hecho desde que comenzó la crisis la ratio de estudiantes en universidades públicas sobre la población entre 18 y 24 años ha subido ininterrumpidamente. Usando la previsión del curso 2013-14 se han ganado casi 7 puntos porcentuales. Por último la competencia de los estudios de FP (más breves y muy dirigidos al mercado laboral) también le ha restado algo de atractivo: desde el curso 2011-12 el alumnado del grado superior ha aumentado un 13%.

Es incuestionable que desde el curso 2010 la financiación de las universidades públicas ha caído de forma sustancial (en torno al 14%). Pero quizás sería conveniente recordar que en los diez años anteriores casi se duplicó mientras la universidad perdía el 15% de sus estudiantes, y que la inversión en universidades, dado el sistema fiscal, tiene un coste de oportunidad en forma de gasto en otras políticas sociales potencialmente más importantes en los tiempos que corren. La mayor crítica que se puede hacer a la reducción de la financiación de las universidades públicas es que se ha producido de forma lineal, sin criterios objetivos, y ha afectado también a las becas. ¿Cuál debería ser la fórmula adecuada para la financiación universitaria? El primer componente sería un aumento de los precios públicos para los que pueden pagarlos. No sería razonable que familias con recursos que han pagado por un colegio privado o concertado entre 2.000 y 6.000 euros anuales piensen que pagar 1100 euros en la universidad es caro. Por cierto, los estudiantes también deberían ser conscientes del coste de sus estudios para la sociedad. En una carta al director de El País un estudiante universitario argumentaba recientemente que si tuviera que emigrar se perderían los 5000 euros que habían costado sus estudios, cuando la realidad es que el coste es cercano a los 42.000 euros. Hay que aumentar significativamente las “becas equidad” pues si antes estábamos a la cola de los países comparables ahora todavía estamos peor. Me parece bien que hayan “becas excelencia” pero esa debería ser una categoría diferente. Finalmente, respecto a la subvención básica, se debería sacar mayor rentabilidad social a los recursos públicos invertidos en la universidad. Es evidente que el sistema universitarios español, dadas todas las restricciones institucionales que tiene, hace un trabajo más que digno. Pero está todavía muy lejos de la frontera eficiente. Que las privadas lo hagan todavía peor no es una buena excusa para mantener el estatus quo. Debería haber un modelo de financiación basado en resultados y no en inputs ni acuerdos discrecionales. Un modelo que aumentara la autonomía de las universidades y la flexibilidad para fijar precios y salarios pero que, a la vez, estuviera acompañado de un sistema de evaluación estricto que tuviera consecuencias financieras a partir de la valoración de la docencia y la investigación de los departamentos universitarios. Un modelo que incentivara contratar los mejores docentes e investigadores y un ajuste real de la oferta de titulaciones a la demanda. Y, por supuesto, un cambio en la gobernanza de la universidad, escollo fundamental para conseguir todos los demás objetivos.

Más tasas para quien puede pagarlas, muchas más “becas equidad” y un uso más eficiente de los recursos públicos. Esta es la ecuación para mejorar la rentabilidad social de la inversión universitaria en España.